

Retos y oportunidades para el medio rural valenciano Una visión desde los Grupos de Acción Local

Eva Aparicio Lara. *Gerente Grupo de Acción Local Castellón Sur 14-20*

Aitana Camps Gisbert. *Gerente Grupo de Acción Local Turia-Calderona*

Joaquín Panella Piera. *Gerente Grup d'Acció Local Rural Muntanya d'Alacant*

El medio rural español ocupa entre el 80%-85% del territorio y alberga el 20% de la población configurando un país no densamente poblado, pero sí poco vertebrado, en el que no nos podemos permitir el lujo de renunciar al 80% del territorio. En él se concentran prácticamente todos los recursos naturales, buena parte del patrimonio histórico y cultural y se desarrolla toda la actividad económica del sector agropecuario, sector encargado de proporcionar alimentos a toda la población y de garantizar la gestión sostenible del medio natural, además constituye en gran medida el refugio de las señas de identidad propias de una sociedad.

Las dinámicas demográficas y económicas del medio rural hacen peligrar su papel multifuncional en el que sobresalen estas tres grandes funciones:

1.- Función económica: El espacio rural tiene una primera y gran función como soporte a la provisión de alimentos de calidad garantes de la salud pública, pero también es lugar para la instalación de pequeñas y medianas empresas industriales, artesanales y comerciales, así como de prestación de servicios, entre las que las relacionadas con el ocio, el turismo y el descanso adquieren especial interés.

2.- Función socio-cultural: El espacio rural tiene también como función asegurar y aumentar su papel socio-cultural, principalmente a través del desarrollo de la vida asociativa local y del incremento de relaciones con la población urbana.

3.- Función ecológica: El espacio rural conserva la fauna y el patrimonio forestal y es el ámbito natural para actividades de ocio y descanso. Las funciones ecológicas del espacio rural tratan de preservar las bases naturales de la vida - el suelo, el agua, el aire -, y tratan también de proteger los espacios verdes, así como de preservar y conservar el paisaje construido por el hombre a lo largo de la historia.

Como común denominador, la actividad económica se ha ido concentrando, a lo largo de un proceso histórico más o menos rápido, en las áreas urbanas y las consecuencias territoriales, económicas, sociales, medioambientales y culturales de este proceso son evidentes. De ahí el interés por gestionar adecuadamente este espacio desde criterios integrales y de multifuncionalidad.

Pero existe una brecha importante, que está propiciando una disfunción general de este sistema dual ya que, por un lado, el mundo urbano concentra los equipamientos, servicios e infraestructuras, las oportunidades de empleo y centros de empresas, los centros de conocimiento, el ocio y la cultura. Y, por otro lado, el mundo rural aglutina todos los recursos absolutamente necesarios para la vida como son los campos de cultivo, el agua, el aire, los bosques, la biodiversidad, etc.

Además, las áreas urbanas se enfrentan a problemas de saturación, masificación y contaminación. Las áreas rurales, por el contrario, soportan amenazas como la pérdida de población, el envejecimiento, el escaso desarrollo económico, la insuficiencia de equipamientos y servicios básicos, la falta de emprendimiento y de empresas consolidadas, todo esto unido a una falta de identidad social y un elevado aumento de riesgos frente a catástrofes naturales.

La visibilidad de esta problemática de ordenación territorial y social está provocando un aumento de la concienciación social sobre los enormes efectos negativos que, sobre el equilibrio territorial, medioambiental y socioeconómico, acarrea el actual proceso de abandono del medio rural, así como la hiperconcentración urbana.

Este hecho se ha comprobado claramente en estos duros momentos que atraviesa el planeta con la pandemia originada por el virus COVID-19. La gestión de la misma en las ciudades más densamente pobladas ha sido y sigue siendo una tarea complicada. En cambio, en territorios rurales, más dispersos con comunidades más reducidas, esta tarea de gestión de la pandemia ha sido más llevadera.

Quizás en estos momentos complicados de cambio y reflexión deberíamos repensar el modelo actual, y definir cómo queremos que sean nuestras ciudades y nuestros pueblos en el futuro.

En nuestro país, el estado lleva años incumpliendo su propia planificación y sus obligaciones (un ejemplo es la Ley 45/2007, del 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural que nunca ha sido implementada), discriminando continuamente y de forma perversa el ámbito rural, dándole la espalda a él y a sus habitantes, considerándolos territorios de segunda y por ello habitantes de segunda. Prueba de ello es el gran desequilibrio económico, social y demográfico que padecen las áreas rurales, por lo que es urgente y necesaria una apuesta política firme y clara que dé solución al grave problema de ordenación territorial y aborde de manera contundente, la falta de visión y sentimiento territorial existente.

No obstante, existe una enorme diversidad, debida a factores históricos y medioambientales, tanto entre las zonas rurales de los diferentes países, como entre diferentes tipologías rurales dentro de cada país.

La Comunidad Valenciana se caracteriza por la dicotomía interior-litoral, sobre todo en los planos demográfico y económico. La oposición entre ambas zonas se manifiesta, entre otras variables, en el elevado grado de envejecimiento de las zonas de interior de la región frente a términos municipales situados en el litoral o prelitoral que presentan mayores tasas de juventud y de renovación de población.

Las personas jóvenes son el futuro de nuestra sociedad. Tras largas décadas inculcando que no había futuro en los pueblos, hemos provocado que la generación mejor formada de la historia se haya concentrado en las ciudades y desarrolle allí todo su potencial tanto personal como profesional. Revertir esta visión de un mundo rural arcaico, antiguo y sin oportunidades va a ser una tarea muy complicada. Para ello deberíamos ofrecer oportunidades de desarrollo personal y profesional a las nuevas generaciones jóvenes, garantizando espacios de trabajo, facilitando la creación de empresas que necesiten de su talento y ofreciendo facilidades y garantías para acceder a la vivienda y a los servicios básicos (educativos, sociales, sanitarios, de ocio y cultura, etc.).

Debemos destruir el mito del mundo rural como algo acabado y precario ya que no hace justicia a la realidad. El tópico de que la ruralidad es vejez, decrepitud y rusticidad no es cierto, en la ruralidad hay jóvenes y profesionales, innovación, ideas y proyectos de futuro pero para poder llevarlos a cabo, materializarlos, se deben ejecutar políticas públicas valientes, innovadoras y coordinadas que ofrezcan posibilidades reales para que la población joven crea en las potencialidades del rural.

Los enormes problemas demográficos que sufre nuestro medio rural valenciano se ponen de manifiesto en el primer informe AVANT, el cual muestra que de los 542 municipios de toda la geografía valenciana, la provincia de Castellón es la que presenta una situación más preocupante en el conjunto autonómico, con un total de 79 pueblos incluidos en la lista de municipios en riesgo de despoblación sobre un total de 135, es decir casi el 60% de los municipios de la provincia de Castellón están en riesgo de desaparecer. En la provincia de Valencia, 46 pueblos están incluidos en esta lista, lo que representa el 17,3% y en Alicante el número asciende 23, lo que representa el 16,30%. La pregunta es *¿Nos podemos permitir perder más de 200 municipios de los 542 existentes de nuestra Comunidad? ¿Seremos capaces de gestionar espacios sin personas?*

La despoblación no sólo afecta a los pueblos más pequeños. En realidad, todo esto supone un efecto dominó que afecta también a los municipios medianos y pequeñas ciudades que hacen las veces de cabeceras de comarca. Sin habitantes en los pueblos vecinos, su oferta de servicios de comercio, ocio o sanidad pierde sentido y, con ello, los empleos se esfuman. Por tanto, también sus habitantes buscan refugio en las grandes ciudades. Este es un círculo vicioso que tiene consecuencias para todo el territorio y por tanto para todas las personas que viven en él.

Hablar de despoblación es hablar de desigualdad de oportunidades y de derechos. Según donde uno nazca y donde uno decida vivir, las obligaciones serán las mismas pero los derechos no. Por lo tanto, debemos apelar a la justicia y la equidad social para deshacer este nudo. La sociedad rural valenciana reclama que este problema se solucione con políticas eficientes y eficaces que rompan este efecto dominó y que garanticen los derechos de la ciudadanía tal y como establece el artículo 139 de la Constitución Española: ***“Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”***.

Mucho se ha escrito ya sobre la relevancia fundamental que las mujeres ofrecen a la sociedad rural. Su papel es de máxima necesidad para el desarrollo social, económico y ambiental de las zonas rurales. Ofreciéndoles oportunidades de empleo dignas ligadas a su formación, eliminando los roles de género establecidos y favoreciendo su incorporación al mercado laboral, a los procesos de toma de decisión, a los puestos de poder y gestión, integrando las políticas de conciliación y corresponsabilidad, y por supuesto destruyendo el empleo precario y sin cotización que recae mayoritariamente sobre ellas, abriremos el rural hacia un nuevo paradigma. Un escenario de futuro donde todas las personas cuenten, aporten y participen.

Por lo tanto, invertir en políticas y proyectos centrados en la juventud rural y en el empoderamiento de las mujeres que viven en el medio rural será invertir en la calidad de vida de toda la población en su conjunto.

Otro problema bastante relevante es la forma de organización del estado, el centralismo existente a nivel político, donde las decisiones se toman desde la metrópolis hacia los pueblos hace que las decisiones que se toman no se adaptan a las realidades rurales. Este aspecto se ha visualizado ampliamente durante la pandemia del COVID-19, donde el distanciamiento social se planificó con perspectiva urbana, sin entender la coyuntura rural.

Las normativas que se aplican en las áreas rurales son las mismas que se aplican a las urbanas, teniendo en cuenta que además en el rural se aplica mucha normativa ambiental ligada al entorno donde se sitúan los municipios. Esto, más que un motor, se convierte en un lastre a la hora de crear actividad económica, debido a que ciertos criterios o normas son muy complicadas de cumplir, ya que no existen condiciones adaptadas que faciliten la instalación de nuevas actividades económicas. Sirva de ejemplo que es más complicado instalar una granja ecológica en el medio rural que una industria contaminante en un polígono industrial.

Por lo tanto, se debería **“legislar con empatía”** teniendo presentes las particularidades del medio rural y actuar con espíritu transversal, aplicando políticas y medidas que faciliten y fomenten el desarrollo de proyectos sostenibles que permitan la instalación de nuevas familias, que busquen los beneficios del medio rural pero que también puedan desarrollar su carrera profesional.

En la vertiente económica, y en concreto si hablamos del sector primario, es necesario la revalorización de lo agrario, la visibilización de la relevancia de un sector absolutamente necesario para todas las personas. La dignificación del trabajo agrario como una opción de futuro y no de descarte, la modernización de explotaciones agrarias y ganaderas, el fomento de la diversificación de la económica agraria, de la incorporación de personas jóvenes formadas, impulsar la transformación de nuestros productos agrarios y ganaderos, son aspectos claves para mejorar nuestros sistemas agrarios y reducir la excesiva dependencia de las grandes industrias y los grandes comercializadores.

La sostenibilidad en las explotaciones agrarias y ganaderas y la incorporación de personas jóvenes al trabajo agrario con nuevas formas de gestión basadas en el conocimiento que desarrollen proyectos innovadores, es también una clave fundamental para el futuro rural.

Ante esto y como alternativa es fundamental el papel de las cooperativas agrarias con una línea estratégica de gestión empresarial desde los principios y valores de la economía social, con la priorización de los productos autóctonos, que apueste por la innovación, la calidad, el marketing, creciendo y diversificando, realizando inversiones productivas y generadoras de empleo.

Es esencial crear y cuidar ese mercado local que aprecia y consume los productos producidos en el territorio, que valora positivamente a las personas que trabajan para ofrecernos agricultura y ganadería de calidad y cercana, productos de artesanía únicos, alimentos saludables y cercanos, etc. En definitiva, que la población sea capaz de entender o valorar cuál es su patrimonio y todos los recursos que tiene a su disposición para diversificar la actividad productiva, para crear una economía que vaya más allá de la agricultura.

El relevo generacional, el reconocimiento de la mujer, la modernización y la adaptación digital del entorno rural son elementos clave para el impulso y la diversificación económica que junto con ayudas fiscales, en un marco legislativo diferenciado que favorezca una discriminación positiva generando un espacio de equidad, la adaptación legislativa y la simplificación de administrativa, facilitarían el dinamismo económico para impulsar la iniciativa privada empresarial y la generación de empleo de calidad, favoreciendo el desarrollo del tejido productivo.

Por su parte, uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento y creación de empleo en el medio rural, es el turismo. La riqueza del patrimonio natural y cultural constituyen un valor que puede generar múltiples oportunidades de desarrollo y empleo, pero las políticas de promoción turística deben tener presente una adecuada organización del territorio y evitar los efectos negativos a nivel de conservación de recursos y sobreexplotación.

Por otro lado, muchos núcleos rurales valencianos tienen problemas de calidad de vida incentivados por las diferencias en las infraestructuras, servicios elementales y equipamiento. La falta de conexiones entre núcleos y nodos intermedios agudiza un grave problema de movilidad. La conectividad es fundamental hoy en día para el desarrollo de estos espacios y la brecha digital es aún una realidad. No menos importante es el creciente problema de acceso a la vivienda, así como el grave riesgo de la exclusión financiera si sigue la tendencia de dificultar o impedir el acceso al dinero en efectivo.

Es necesaria una mejora de la dotación de infraestructuras que permitan atender las necesidades de la población en aspectos esenciales como son comunicaciones, transportes, abastecimiento de electricidad y agua, servicios sanitarios y educativos, tratamiento de residuos, así como ampliar las posibilidades de desarrollo económico y de acceso a las nuevas tecnologías, incluyendo el desarrollo de comunidades inteligentes.

Los efectos de la despoblación rural son tan intensos, que revertir esta tendencia puede ser clave incluso en la lucha contra el cambio climático, ya que cuando se abandona el medio rural el equilibrio establecido con su ecosistema se rompe. Una consecuencia de esa rotura son los incendios. El abandono de campos de cultivo se

traduce en un aumento de la vegetación que acaba por convertir lo que tradicionalmente servía de cortafuegos en un elemento expansivo de las llamas. Algo que explica, en parte, la cada vez mayor envergadura de los incendios forestales en el territorio valenciano.

Además, aumenta la desertificación, la cual, a su vez, disminuye la diversidad biológica, cuyo papel es decisivo en la conservación del suelo, la regulación del agua y la mitigación del cambio climático. Que vivan y trabajen personas en el medio rural significa sufrir menos incendios, contener la desertificación de la península, proteger los recursos hídricos y luchar contra el aumento de las temperaturas, entre otros muchos y valiosos beneficios. Además del papel del ganado para limpiar los bosques, la agricultura tradicional también contribuye a conservar la biodiversidad. Los cultivos ayudan a evitar la erosión del suelo, una de las causas de la desertificación. Además, los sistemas agrarios tradicionales retienen más carbono y contribuyen a purificar el agua, así como a mantener especies animales y vegetales autóctonas, adaptadas a las condiciones de la zona.

¿La ruralidad valenciana tiene futuro? aunque todo parece indicar que la tendencia a nivel global es la concentración de la población en grandes urbes, se perciben cambios importantes en los últimos tiempos, especialmente por parte de muchos jóvenes que deciden quedarse en el pueblo. Hasta ahora se había naturalizado que el joven cultivado intelectualmente se iba del pueblo a la ciudad, pero ahora se ven movimientos de resistencia, aunque todo dependerá en última instancia de las políticas que se apliquen.

A veces es imposible quedarse a trabajar por falta de servicios, pero en los pueblos mínimamente dotados se aprecia una tendencia de los jóvenes autóctonos a permanecer allí, lo que resulta algo esperanzador para aquellos que vemos en la ruralidad un valor a proteger y recuperar.

Recuperar el valor de vivir en un pueblo, dignificándolo como un modo de vida alternativo a las ciudades, pero teniendo en cuenta a las gentes del medio rural, el desarrollo comunitario y el sentido de pertenencia a veces tiene una mirada hacia tras nostálgica que está legitimada, pero también hay que ser capaces de transformarla en una mirada hacia delante de construir alternativas viables a lo que fue en el pasado y ya no puede ser por cuestiones socioeconómicas y estructurales mutando hacia una proposición más emprendedora más de *¿Qué significa ser de aquí para el futuro?* y no *¿Qué significa ser de aquí con respecto al pasado?*.

Existen estructuras públicas y privadas territoriales diseñadas y sobrefinanciadas en lo político e infrafinanciadas en lo técnico por lo que no pueden ser un motor de desarrollo territorial pleno. Un reto sigue siendo acoplar el vaivén político de cada cuatro años a estos procesos de desarrollo y la continuidad de las personas y de los equipos técnicos humanos y de las organizaciones. Es fundamental, ya que acumulan capacidad, inteligencia y experiencia que se pierde cada pocos años.

Es necesario, unificar esfuerzos económicos y comunitarios, se trata de trabajar con las comunidades rurales para que entiendan que tienen responsabilidades. Ha de ser la población local la que se autoorganice, marque las pautas a seguir y quien diga hacia dónde deben ir dirigidas las medidas que se adopten. Y para eso hace falta también una sociedad civil activa que lo impulse.

Las nuevas políticas públicas deben ser políticas eficientes y facilitadoras pensadas a nivel territorial que garanticen los derechos de la ciudadanía, que generen ocupación y servicios de calidad, frenen el desequilibrio territorial y la despoblación, así como preserven los valores sociales, económicos, culturales y medioambientales asociados al ámbito rural.

“Somos los máximos responsables del futuro de nuestros pueblos”